

Discurso del Defensor del Pueblo Europeo, Sr. Jacob Söderman ante la Convención Europea, 8 de noviembre de 2002

Sr. Presidente:

Quisiera sumarme a todos los que le han felicitado por la presentación del anteproyecto de tratado constitucional. Esta iniciativa hace posible la realización de un debate constructivo sobre las importantes materias planteadas a la Convención.

El anteproyecto ha incluido muy acertadamente un artículo referido a la ciudadanía de la Unión. Esta figura establecida por el Tratado de Maastricht en 1993, creó una serie de nuevos derechos a los que se acompañó un medio innovador para su protección: el derecho a presentar reclamaciones a un Defensor del Pueblo Europeo en casos de mala administración en las actividades de las instituciones y órganos comunitarios.

Se trataba de fomentar una administración más abierta, responsable y con vocación de servicio, y de este modo mejorar las relaciones entre la administración europea y los ciudadanos.

La institución del Defensor del Pueblo nació en Europa y representa uno de los avances constitucionales más trascendentales de nuestro tiempo. Su extensión es hoy notable: ha echado raíces en todos los continentes y en más de cien países, asumiendo una variedad de denominaciones, ya sea el "Parliamentary Commissioner for Administration" en el Reino Unido, "Médiateur de la République" en Francia, Defensor del Pueblo en España, "Parlamentets ombudsmand" en Dinamarca, o el "Commissioner for Civil Rights Protection" en Polonia. La institución del Defensor del Pueblo está también establecida en la mayoría de los Estados Miembros de la Unión, así como también en los diez Estados que se adherirán a la Unión en 2004.

Durante los últimos siete años, he gestionado más de 10.000 reclamaciones de ciudadanos, sobre una amplia gama de temas. Me complace poder subrayar que la Comisión Europea y las demás instituciones y órganos han cooperado satisfactoriamente con la institución, coadyuvando al logro de buenos resultados para numerosos denunciantes, en materias como acceso a documentos, soluciones a litigios contractuales, respuestas a la correspondencia con las instituciones, la participación en procedimientos de licitación o la abolición de la discriminación.

La labor del Defensor del Pueblo Europeo ha contribuido también a que se adoptasen medidas de orden más general, entre las que destacan normas sobre acceso a los documentos, un Código de Buena Conducta Administrativa y la puesta en práctica de la Carta de Derechos Fundamentales, que incluye el derecho a una buena administración.

Hemos creado una red con las Defensorías del Pueblo y las Comisiones de Peticiones en los Estados Miembros y en los Estados candidatos a la adhesión. Su objetivo es articular un mecanismo eficiente al servicio de los ciudadanos para la reparación no judicial de problemas derivados de la aplicación del derecho comunitario.

Sr. Presidente,

La intención de un anteproyecto es encauzar y estimular el debate, y permitir la corrección de errores y omisiones. En consecuencia, quisiera proponer que el próximo proyecto de tratado incluya una disposición que haga referencia explícita a este eficaz derecho ciudadano: el derecho a presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo. Ello estaría en consonancia con la mayoría de las constituciones nacionales de los Estados que están representados hoy en esta sala.

Muchas gracias por su atención.

Anexo: posible redacción que podría incluirse en la propuesta de Artículo 5 del Tratado Constitucional:

Un Defensor del Pueblo será nombrado por el Parlamento Europeo. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos **de la Unión**, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.